



Sectores sociales populares para la paz en Colombia

PROYECTO PLANETA PAZ

La negociación política del conflicto armado anunciada por el Gobierno y las FARC como oportunidad para la construcción de la paz

Al estar próxima la reunión de instalación de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno colombiano y las FARC en Oslo, como resultado del *Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*, firmado el pasado 4 de septiembre, el Proyecto **Planeta Paz** valora su estado actual y potencial, teniendo presente las siguientes consideraciones.

El lugar político de la negociación

Colombia es un país construido sobre múltiples conflictos, desde la forma como el Estado ha hecho presencia en la vida social, cotidiana de la población y la manera como ha conquistado el territorio, hasta la combinación simultánea -década tras década- de lógicas bélicas y políticas de desarrollo. Sobre este tipo de construcción, la política gubernamental ha jugado con la integración de unos sectores de la población a los derechos y vida ciudadana, en tanto ha desvalorizado a otros, ejercicio realizado bien a través de mecanismos de adscripción partidista y políticas marginales de redistribución o bien a través del dejar hacer a élites y actores poderosos, quienes se han creído con la capacidad de imponer su ley.

Como resultado de esta construcción hemos vivido también sucesivas confrontaciones regionales, recomposiciones de los partidos políticos incluidos acuerdos entre ellos, ciclos de violencias y ciclos de relativa estabilidad política si se entiende por tal la rutina de elecciones por voto. A pesar de ser las elecciones una línea continua en la historia nacional, ha estado imbuida en una cultura política transpartidista de la violencia que ha llevado tanto a la exclusión física o simbólica de los oponentes como a la aceptación de políticos íntimamente ligados a los conflictos y la violencia. Es una cultura que ha impedido construir hegemonías basadas en consensos.

Colombia es también un país profundamente desigual, en la manera como se distribuyen los recursos y el territorio. Lo es en cuanto a la distribución del ingreso y la propiedad, en particular, la rural. Lo ha sido siempre en cuanto al acceso a los derechos sociales, económicos y políticos. Esta desigualdad es uno de los resultados de múltiples conflictos por cuanto se asienta sobre mecanismos de coerción que se traducen en el incumplimiento de derechos laborales, la no vinculación de la población trabajadora a la seguridad social, la continua expansión de la frontera territorial sin formalizar la propiedad de la tierra, la escasa incorporación de las propuestas de las organizaciones populares que han pedido su integración a beneficios ciudadanos a los cuales creen tener derecho.

Se puede ahondar en la historia de Colombia y encontrar en cada momento la persistencia de esta cultura política y estas desigualdades, matizadas por progresos en algunos de los índices de satisfacción

de necesidades que contrastan con desequilibrios económicos y políticos que comprometen incluso la vida misma.

El país ha ensayado también ejercicios de negociación de conflictos. Lo hizo muchas veces en los siglos XIX y XX para incorporar a contrincantes políticos, usualmente de los partidos tradicionales, a un régimen político común, sin que por ello resolvieran los desequilibrios sociales y económicos o ampliaran el acceso al poder más allá de lo que se estimaba convencional. Así fue el acuerdo del Frente Nacional, que alimenta una de las ramas del conflicto que hoy se quiere resolver. ¿Qué hubiera ocurrido si este Acuerdo hubiese abierto la participación política? ¿Si los partidos tradicionales le hubiesen pedido perdón a la sociedad por la violencia que desataron? ¿Si hubiesen distribuido la propiedad de la tierra, incluso, devuelto la despojada? ¿Si la política económica no se hubiese separado de los conflictos sobre la base de construir islas productivas, resguardadas por patrones de seguridad desmedidos que nos han llevado hasta los horrores de hoy día?

Pero la historia debe servir para alimentar la memoria y, sobre todo, la verdad y la justicia, base de toda negociación que aspire a desarticular las lógicas bélicas y la guerra. La historia es entonces muy útil para dar un lugar específico a la negociación que intentan hoy día el Gobierno con las FARC –y ojalá con el ELN-, pues la función de la Mesa no será en esencia resolver lo divino y lo humano –o dejar perder lo divino y lo humano, para lo cual la agenda acordada es un excelente punto de inicio-, sino erradicar de la vida social colombiana ese *estado de guerra* en que vive la mayor parte de su habitantes por la incertidumbre permanente frente a la obtención de los medios necesarios para garantizar la vida biológica y una vida digna que les permita acceder a las posibilidades de autorrealización que ofrece el mundo contemporáneo.

Negociar significa hacer de otra manera la Política

La única paz no es el desarme. La negociación del conflicto armado implica dar el primer lugar a los derechos políticos. Es efectivamente una oportunidad para transformar la sociedad porque ni las élites ni los partidos han realizado por sí mismos un cambio que de sustento real a la equidad, la justicia y la democracia; por el contrario, en muchos escenarios los conflictos –en particular el amado- han sido usados para fortalecer poderes y fortunas. No se trata entonces de traer a la vida civil, como dicen algunos analistas, a los *terroristas para que dejen de disparar y hagan política –versión simple de la negociación-*, pues si de ello se tratase bien habría que sentar a todos aquellos que con comportamientos grupales y de poder han promovido lógicas bélicas como forma de tratar las diferencias o crear la riqueza.

La negociación es uno de los pasos sustanciales para dar continuidad a la construcción de la paz en la que han estado empeñadas muchas organizaciones sociales, y supone la creación de condiciones políticas, sociales, culturales y económicas para que los múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana se resuelvan sin que ninguno de los actores involucrados en ellos recurra a estrategias bélicas que impliquen la eliminación física o simbólica de los adversarios.

Así, la *construcción de la paz* y la erradicación del *estado de guerra* comprenden al menos tres requisitos:

- **Garantías político democráticas:** Garantizar institucional y socialmente que los conflictos sociales puedan resolverse o cualificarse mediante mecanismos políticos democráticos, que guiados por la materialización de medios para ofrecer una vida digna permitan la participación directa y decisoria de los más afectados.

- No más militarizaciones: Impedir la militarización, legal o ilegal, de la vida social colombiana y la imposición de una lógica bélica de socialización, en virtud de la cual los antagonistas políticos son convertidos en enemigos que pueden ser tratados por debajo de los límites que separan lo humano de lo inhumano.
- Aclimatar la paz y garantías de no repetición: Detener los mecanismos sociales, políticos y económicos que convierten los conflictos sociales en conflictos bélicos, tratándolos como disfuncionalidades o desviaciones que deben ser combatidas y reprimidas para salvaguardar el orden social, y no como señales claras del deficiente funcionamiento institucional y sistémico de la sociedad colombiana.

Cumplir con estos requisitos es la nueva tarea de la Política.

Gradualidad y transición

El concepto de *construcción de paz* es necesario para acompañar la negociación del conflicto armado, pues esta no significa simplemente superar el conflicto mediante la incorporación de todos los combatientes a la vida civil o mediante la derrota militar de las organizaciones armadas consideradas ilegales.

La *construcción de la paz* implica gradualidad y transición, entendidas como las acciones prácticas y de sentido que han de caracterizar la política pública para reconocer e incorporar las propuestas de las regiones y las agendas de los movimientos sociales. Los contenidos y las formas de la política gubernamental han llevado a una fragmentación de lo *público* –lo que es de todas y de todos- en manos de múltiples actores que no siempre tienen interés en el ejercicio de los derechos sino intereses particulares. La reconstrucción de lo *público* se vuelve entonces sustancial para la paz, el ejercicio de los derechos y el rol de un Estado que se haga responsable frente a la sociedad.

Es por ello que no deja de ser paradójico que el presidente Santos nombre en el equipo negociador del gobierno a un representante de los gremios económicos pero no a uno de los sectores populares, con lo cual el gobierno se alindera en una perspectiva y refuerza el interés de lo privado sobre lo público. Es bien cierto que los gremios económicos tienen derecho a participar –¡deben participar en la negociación y la construcción de la paz!- pero, ¿qué explica que sean parte del equipo gubernamental? ¿No deberían tener un estatus similar al de un delegado de las organizaciones sociales populares y, en particular, de las mujeres? La razón de esta apreciación es sencilla, puesto que los sectores populares y las mujeres piensan y sienten la paz sustancialmente diferente a como la entienden los empresarios. Mientras los primeros piensan más en calidad y opciones de vida, los segundos la suelen ver como la pax que permite la extensión de las políticas de desarrollo. Los movimientos populares entenderán entonces que las agendas que han diseñado por años tendrán que hacer curso por su propia acción a los escenarios de negociación y construcción de la paz.

La negociación del conflicto armado con las guerrillas es entonces un momento muy importante para la transformación de la vida social, política y cultural del país. Es un paso que la sociedad, los partidos y las élites debieran reconocer como sustancial para hacer el ejercicio profundo de democracia que nunca se ha hecho y tomar las decisiones sobre aquello que humanamente no será aceptable en el futuro para ningún actor, legal e ilegal. A partir de estas consideraciones, el equipo de trabajo del Proyecto **Planeta Paz** hace explícito su beneplácito por los anuncios del Gobierno y las FARC, pues encuentra que ellos pueden marcar los nuevos rumbos de la política y de la fortaleza de los movimientos sociales populares que habrán de llevarnos a la *paz estable y duradera*.